

Las empresas sociales en el actual contexto latinoamericano

Miguel Ángel Márquez Zárate

Resumen

El actual proceso de reestructuración económica a nivel mundial ha traído como consecuencia la aplicación de programas de ajuste que derivan en un aumento considerable de la pobreza. América Latina no es la excepción pues durante las últimas décadas el nivel de vida se ha deteriorado. En este ámbito, la participación social se vuelve imprescindible para dar solución a los problemas sociales que se padecen. Uno de los mecanismos que están dando resultados favorables al respecto son las empresas sociales.

Abstract

The current economic restructuring process at world level has brought as consequence the application of adjustment programs that result in a considerable increase of the poverty. Latin America is not the exception, during the last decades the standard of living has been deteriorated. In this area the social participation is returned indispensable to give solution to the social problems that are suffered. One of the successful mechanisms in this regard is the social company.

Las transformaciones generadas en América Latina como resultado de los procesos de reestructuración económica han producido un cambio en la concepción del Estado, en sus características y funciones, así como en la delimitación misma de la función pública. De manera más notable, los efectos de las políticas macroeconómicas han agudizado los problemas sociales existentes en la mayor parte de la población latinoamericana.

Uno de los mayores problemas con los que se enfrenta la mayoría de los países latinoamericanos es el concerniente al aumento considerable de la pobreza. Por ello, el objeto del presente ensayo es el de reflexionar sobre las condiciones sociales y económicas existentes en la región, así como revalorar la importancia de la participación social como vía para coadyuvar en el bienestar anhelado, a través de empresas sociales.

El estudio de las empresas sociales en el actual contexto latinoamericano resulta de suma importancia para comprender el papel que está adquiriendo la participación social en los procesos productivos, particularmente de los grupos marginados.

Para fines de presentación, en primer término se realiza un análisis de los efectos que ha traído consigo la aplicación de las políticas monetaristas en América Latina. En segundo lugar se estudia la importancia de la participación social en el nuevo contexto latinoamericano, para pasar a un tercer apartado, que se aboca a estudiar algunos ejemplos de empresas sociales como coadyuvantes para lograr el desarrollo requerido.

Aspectos sobre la pobreza y el Estado en América Latina

En la actualidad el principal problema social al que se enfrentan los países latinoamericanos es el de la pobreza, agudizada por crisis económicas recurrentes y que, en diferentes grados y manifestaciones, han tenido efectos importantes en el empleo, ingreso, distribución y calidad de vida, entre otros elementos.

Asimismo, existe un reconocimiento generalizado respecto a que la crisis económica que afecta a América Latina, manifiesta desde la década de los ochentas y hasta la actualidad, es la más grave que ha enfrentado la región desde los años treinta y, en opinión de algunos, la de mayor impacto y trascendencia.

Las naciones latinoamericanas se encuentran en la antesala de un tránsito histórico de grandes proyecciones y ante transformaciones que implican cambios tanto en sus patrones de desarrollo interno como en su sistema de relaciones económicas enfocadas hacia la globalización económica mundial.

Si bien las expresiones de los gobiernos se identifican con acciones y políticas económicas tendientes hacia la estabilidad y recuperación en el ámbito económico, en el orden social estos procesos presentan resultados adversos y retrocesos que han afectado con gran intensidad las condiciones sociales en que se desenvuelve el grueso de la población.

A la dificultad que ha existido siempre para analizar a América Latina como una unidad, se añade la enorme complejidad cultural y política existente, que supone reconocer especificidades, si bien comunes, sí diferenciadas para su atención y reconocimiento público. Hoy día no estamos, y quizá no estaremos, en condiciones de definir opciones únicas para explicar problemáticas y ubicar soluciones que den muestras de avances reales en términos del desarrollo social. Las necesidades sociales son históricas y en ellas se pueden reconocer dinámicas propias en cada uno de los países, en sus actores, relaciones y proyectos sociales comunes.

Desde finales del siglo pasado, la mayoría de los pueblos latinoamericanos han venido involucrándose en procesos de transformación de sus estructuras políticas, económicas y estatales; transiciones profundas en los regímenes políticos. Simultáneamente, las políticas de ajuste impuestas por los modelos neoliberales han sido los mecanismos mediante los cuales se han propiciado cambios en los procesos productivos y de los recursos nacionales no sólo hacia el pago de la deuda externa, sino hacia las pautas de producción y consumo determinadas por reglas de la competencia a escala mundial.

A la fecha, existe un número importante de estudios sobre los cambios que se han presentando en los sistemas económicos y políticos internos de cada una de las naciones en la región. Si bien en algunos se da cuenta de nuevos procesos de recomposición económica entre grupos y oligarquías financieras, existen muchas evidencias que demuestran las causas que han producido estallidos sociales, la creciente ola de empobrecimiento de las mayorías frente al enriquecimiento ostentoso de una minoría, así como la falta de alternativas al desarrollo social.

Uno de los informes más representativos es el de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitido a finales del año 2000, el cual señala que:

a pesar de la inmensa potencialidad de recursos naturales, en América Latina casi la mitad de su población es pobre. Esto es que el 36 por ciento de los niños menores de dos años de edad de la región se halla en alto riesgo alimentario, con problemas de desnutrición; entre 6 y 12 años se encuentran por debajo de la línea de la pobreza; la desocupación es alta, 9 por ciento, pero la de los jóvenes es aún peor, casi el doble. Justamente, estos procesos se hallan ligados a factores como la mencionada desocupación juvenil, la baja escolaridad y el deterioro que está experimentando la familia bajo el embate de la pobreza. Es la región más desigual del planeta (Kliksberg, 2001:XII).

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó que:

el panorama social de Latinoamérica, es decir la población en situación de pobreza, creció de 1997 hasta comienzos del 2000, de 204 millones a no menos de 220 millones. Así, en países como Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá y Venezuela, entre otros, la CEPAL constata que el 75 por ciento de la población que tiene ocupación percibe ingresos promedio que en la mayoría de los países no alcanzan por sí solos para elevar la situación de una familia de tamaño y composición típica (Kliksberg, 2001:5).

En este marco, y como también lo ha demostrado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde los años ochentas, el número de personas que ganan menos de dos dólares diarios ha sido una constante en las estadísticas sobre la composición y características de los hogares. Tanto en México como en Centro y Sudamérica las cifras sobre la pobreza apuntan hacia proyecciones alarmantes sobre los niveles de empleo, educación, alimentación, salud, entre otros indicadores.

Al respecto, el *Informe sobre perspectivas de América Latina en el nuevo contexto internacional* difundido por la CEPAL en mayo de 2001, considera no sólo un escenario externo más adverso del que se percibía a fines de 2000, sino señala los impactos económicos hacia la región como producto de la desaceleración de las principales economías del mundo (Estados Unidos y Japón) lo que indudablemente acarrea nuevos efectos en el crecimiento y desarrollo social. Por

ejemplo, en América Latina más de la mitad de sus exportaciones se dirigen hacia el mercado estadounidense; existe en algunos países –como México– una dependencia económica cercana al 85 por ciento, debido a exportaciones de petróleo, entre otros productos comerciales e industriales (CEPAL, 2001).

La desaceleración económica en Estados Unidos evidencia nuevamente el impacto directo en las exportaciones de varios países latinoamericanos, así como en los procesos de producción internos que lógicamente implican cambios en las estructuras productivas, en el financiamiento externo, en el empleo, consumo y capacidad de inversión. Hacia diciembre de 2000, la CEPAL “estimó que se pasaría de un crecimiento de 4 por ciento a uno de 3.8 por ciento en la región. En mayo de 2001 se estimó que el crecimiento para el conjunto de América Latina sería de 3 por ciento, pudiendo, en un escenario más pesimista, reducirse a 2.7 por ciento.” (*Ibid*).

Frente a estas realidades económicas la alternativa lógica es ubicar y tratar de encontrar vías alternas que propicien mecanismos de solución hacia el crecimiento y desarrollo social. No obstante, en América Latina, a pesar de las evidentes manifestaciones de repudio social hacia las medidas económicas, persiste una visión limitada por parte de los gobiernos para enfrentar de manera seria y responsable el problema de la pobreza.

La experiencia en América Latina indica que el crecimiento económico es insoslayable. Es muy importante tratar de aumentar no sólo el producto total de una sociedad; también es necesario aprovechar las potencialidades de sus recursos humanos, de sus expresiones e identidades sociales y culturales. De allí que consideremos que no basta que los gobiernos y sus administraciones evalúen problemáticas sociales, sino que integren diversas medidas de reconocimiento social acordes a sus características y procesos socioeconómicos internos.

En la medida en que las sociedades latinoamericanas se vuelven más complejas, y los grupos que las integran se hacen más grandes y menos homogéneos, el Estado debiera reasumir las responsabilidades inherentes a su naturaleza a fin de promover plenamente el bienestar de los individuos que componen a estas sociedades.

Por ejemplo, los mercados no resultan eficientes cuando los distorsionan los monopolios o cuando la información esencial no está al alcance de la sociedad, o resulta demasiado onerosa para que puedan acceder a ella. Se plantea entonces la necesidad de que el Estado regule los mercados y proporcione un mínimo de información esencial a la población. De ahí que deba revisarse el papel de las instituciones para satisfacer esas necesidades.

Lo anterior se relaciona con la baja calidad de los servicios públicos que brinda el Estado a los estratos más pobres de la sociedad, por ejemplo, los servicios públicos de educación y salud con respecto de los privados aún se caracterizan por deficientes infraestructuras, niveles muy inferiores de remuneración y de formación de sus profesionales, recursos técnicos por debajo del nivel requerido, etcétera.

Los servicios públicos que, no obstante son los que utiliza la mayoría de la población en América Latina, devienen todavía en educación y salud de pobre calidad; factor éste que no sólo evidencia la persistente precariedad real a pesar de las mayores coberturas logradas en la última década, sino que constituye una fuente clave de las inequidades que se expresan en campos tan cruciales como el del empleo, lo que refuerza los procesos de exclusión social.

En efecto, si se observa el comportamiento de estos procesos es posible concluir que el Estado en América Latina aún sigue siendo pobre y que, por tanto, dispone de limitadas capacidades para incidir en el fortalecimiento de los derechos sociales.

En suma, los Estados latinoamericanos necesitan replantear sus reglamentos e instituciones. El papel del Estado ha evolucionado con el tiempo y en forma diferente en los países, debido en parte a visiones cambiantes o distintas de ese papel y a la evolución de las tecnologías que afectan las posibilidades de acción estatal. Por lo tanto, la eficiencia del sector público debe valorarse a la luz de los objetivos y prioridades del gobierno en una coyuntura dada.

Sin duda, estos objetivos pueden variar en función de las necesidades actuales de un país en particular y a veces pueden incluso entrar en conflicto unos con otros. El Estado cumple su papel poniendo en juego una serie de reglamentos, leyes e instituciones que conforman el sector público. Así, podemos decir que cuanto más alta sea la calidad de este sector, tanto más fácil le será al Estado cumplir sus cometidos, como el combate a la pobreza y la distribución equitativa del ingreso entre la sociedad.

Estado y participación social

El papel del Estado respecto a la sociedad en América Latina se encuentra en una fase de reestructuración. El sector público está enfrentando una profunda renovación. En mayor o menor medida existe una amplia necesidad por asegurar el curso de las economías y, al mismo tiempo, mantener la cohesión social de la población. Así, frente a diversos problemas y necesidades sociales, la gestión estatal en la región se ha caracterizado por mantener estructuras relativamente centralizadas a fin de garantizar el funcionamiento institucional.

Adicionalmente, los Estados han tenido que enfrentarse no sólo al control del gasto público como resultado de deudas acumuladas, y que limita su capacidad de acción pública, sino a cambios demográficos y sociales que han incidido también sobre las expectativas de los ciudadanos en el suministro de servicios sociales y otras formas de acceso para participar en procesos productivos y comerciales.

En el transcurso de los años ochentas y noventas las estructuras y procedimientos del sector público han sido cuestionados y sujetos a reformas, aunque con ritmos e intensidades diferentes. En algunos países como México, la reducción del tamaño del Estado ha puesto énfasis en sectores económicos claves del desarrollo económico y social.

En este tenor, la agenda sobre el papel de las empresas públicas en la organización y gestión de los servicios públicos resulta un punto fundamental para explicar nuevas formas de gestión estatal y social respecto a las demandas e intereses de sectores privados, organizaciones y grupos entre la población.

En el actual contexto económico y político que vive América Latina la participación social en el diseño y formulación de políticas sociales resulta necesaria para arribar a nuevas fórmulas y relaciones de gobernabilidad. En este sentido, el considerar la opinión de nuevos actores en la deliberación de asuntos públicos tiene que situarse bajo una óptica de creciente complejidad social y gubernamental.

Las sociedades y los gobiernos en la región se encuentran cada vez más interconectados y dispuestos a enfrentar problemas comunes de la vida política y económica. Sin embargo, los retos en el orden social exigen mayores recursos para responder a una dinámica multifacética y diferenciada en términos de los actores, sus intereses y valores que dan cuerpo a la vida social, institucional y estatal.

Ante las nuevas realidades como los procesos de globalización, la internacionalización de los conflictos, las turbulencias financieras, la lucha contra la pobreza y el combate a la exclusión social, entre otras, los Estados tienen que revisar sus estrategias de gobierno para asegurar la unión y el desarrollo de las sociedades. El desarrollo entendido como el logro del crecimiento material de la sociedad, la distribución equitativa de la riqueza y el mejoramiento continuo en la calidad de vida, es definitivamente el reto mayor que los Estados tienen para asegurar su conservación sana, eficaz y productiva.

Por otra parte, la búsqueda de mecanismos alternos que hagan posible condiciones sociales dignas para la mayoría de la población afectada por las políticas macroeconómicas es un desafío que tiene que ver con acciones cada vez mejor coordinadas. Implica no sólo revisar procesos de producción y marcos regulatorios en lo económico sino revalorar la participación pública, de organismos privados, organizaciones sociales y civiles en el desarrollo social.

En la región, la emergencia de grupos y organizaciones en el ámbito no institucional ha adquirido una enorme importancia. Desde los años ochentas se habla de un incremento de la actividad autónoma de parte de una pluralidad de organizaciones y movimientos que pugnan por demandas específicas que las instancias políticas no han podido o no han querido atender.

Desde problemas básicos como la gestión de vivienda, salud, empleo y hasta financiamiento para formalizar un negocio de abasto comercial, entre otras, sectores específicos de la población han venido expresando su deseo por coadyuvar en el mejoramiento social a través de estrategias de participación que van desde la autoayuda y autogestión hasta procesos mayores como la asistencia social, además de otras formas de organización social más políticas e institucionalizadas.

En la actualidad podemos reconocer claramente un amplio conjunto de organizaciones, formales e informales, que se ubican en actividades económicas, esto es, que establecen asociaciones y redes productivas y comerciales; las que tienen

que ver con actividades culturales, que defienden derechos, valores, creencias y símbolos; las que se dedican al fomento de la educación e información, sin fines de lucro sobre ideas y divulgación de la cultura; las de interés, que luchan no sólo por defender causas o justas razones por su trabajo, actividad social o económica; las de desarrollo que se articulan como empresas sociales y que trabajan por mejorar la infraestructura, instituciones y la calidad de vida de la sociedad; las que pugnan por la defensa del medio ambiente, por el respeto a los derechos sociales de las mujeres o de protección al consumidor; las que buscan, de manera no partidista, mejorar las vías de acceso y representación en el sistema político, etcétera.

Indudablemente, el asunto de la pobreza y el de la participación social están ligados a la cuestión de la democracia. Por el cúmulo de iniciativas sociales generadas en los últimos años, la importancia de la sociedad civil y de la participación social y política son elementos esenciales para entender los procesos sociales y políticos actuales.

Es menester señalar que la actividad de las organizaciones civiles tiene que ver con fines públicos antes que privados. Su relación con el Estado y su interés por mitigar la pobreza, por ejemplo, se dirige evidentemente hacia un cambio en la concepción de la vida social y económica dominante. En gran medida, las diversas organizaciones y grupos sociales y civiles existentes en la región buscan en el Estado no sólo concesiones y espacios de trabajo, sino beneficios, cambios en las políticas, asistencia, compensaciones y compromisos.

Por la misma diversidad y pluralismo, las organizaciones no sólo se distinguen de los partidos y asociaciones políticas, sino su interés radica precisamente en sus objetivos públicos, de mayor coordinación social e institucional enfocadas hacia el desarrollo y mejoramiento de las condiciones sociales entre la población.

Evidentemente no todas las organizaciones en Latinoamérica tienen el mismo potencial para desempeñar acciones como las antes descritas. Su habilidad para hacerlo depende de varias características en su estructura interna y ámbito social en que se desarrollan y emergen.

Por esta razón, y a manera de comentar algunos ejemplos representativos, en el siguiente punto exponemos, finalmente, algunas experiencias que permiten ubicar formas de participación social que han coadyuvado a fomentar entre la sociedad y frente al Estado mismo acciones encaminadas hacia el mejoramiento y desarrollo social.

Participación social para el desarrollo: algunas experiencias de empresas sociales en Latinoamérica

La experiencia de América Latina y otras regiones del globo nos hace reflexionar sobre la importancia de la participación social para lograr un desarrollo armónico. No se puede retroceder a viejos esquemas autoritarios para salir de la actual

crisis. Es imprescindible considerar el aumentar el producto total de una sociedad. Es básico también desarrollar todo el cúmulo de capacidades de índole tecnológico, de la misma competitividad y sobre todo lograr un clima de estabilidad económica. Pero la experiencia enseña también que es necesario la búsqueda de nuevas alternativas de desarrollo donde el Estado tenga una función con una orientación redistributiva real que pueda mitigar la desigualdad económica. En este contexto, *la responsabilidad ciudadana*, sin diluir la responsabilidad estatal, es de suma importancia para configurar las nuevas formas de relación económica en la región.

Ante la actual crisis económica, se ha intentado justificar la reducción del papel del Estado en la promoción y protección de los derechos humanos, aduciendo que ellos son los causantes de la irresponsabilidad y pasividad social. Frente a estas posiciones es imprescindible considerar que no hay razones para suponer que un Estado social implica automáticamente un modelo de ciudadano pasivo. No es la destrucción del Estado social. El problema más bien es lograr una nueva configuración, más democrática y eficiente del propio Estado, basado a su vez en una noción de ciudadanía arraigada en el compromiso social; exige dar satisfacción a las necesidades sociales. Por lo tanto, se necesita desarrollar nuevos marcos institucionales que tengan por objeto estimular la solidaridad social y la responsabilidad con los asuntos públicos.

La corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad en la producción de servicios y bienes es de suma importancia para aumentar el nivel de vida de una población que cada vez siente mayor incertidumbre y pesimismo frente al futuro.

La prestación de asistencia social es posible a través de mecanismos tendientes a buscar la participación social, en la elaboración e implantación de políticas públicas por medio del establecimiento de empresas de carácter eminentemente social como en la educación o en los sistemas de salud y abasto; la experiencia en algunos países de América Latina así lo demuestra.

Es innegable que la dedicación humana, producto del compromiso ideológico que vincula a los miembros en términos de solidaridad, responsabilidad y sentido del deber, ofrece una enorme ventaja a los usuarios de los servicios, especialmente cuando se refieren al cuidado de la salud o de la educación.

Lo que se ha venido a denominar "tercer sector" expresa, precisamente, una voluntad de auto-organización social en pos de la satisfacción de necesidades colectivas cuyo sustento básico es la solidaridad social. Los entes que integran el tercer sector constituyen, en tal sentido, una escuela de la democracia, habida cuenta que es en las organizaciones voluntarias, basadas en la libertad e igualdad, donde se pueden aprender las virtudes de la obligación mutua y, por ende, el sentido de la civilidad que hace a la democracia posible.

Las organizaciones voluntarias establecen posibilidades reales de limitar la acción del Estado sin que ello se traduzca en una lesión de los derechos humanos. La acumulación, a través de las organizaciones, por parte de los sujetos sociales de habilidades y capacidades –técnicas, materiales, analíticas– para resolver diversos obstáculos e incidir, por ejemplo, en la satisfacción de las necesidades bási-

cas, puede lograr la limitación del Estado. Al apelar a la cooperación voluntaria y a la responsabilidad social, el sector público no estatal crea las bases del compromiso cívico y, por tanto, de la propia democracia.

La solidaridad ha demostrado que es el arma más potente que tienen ante sí los diversos grupos organizados para la satisfacción de sus necesidades, lo cual incide en las capacidades de auto-organización social.

La participación social no sólo debe enmarcarse en la satisfacción de ciertos servicios públicos, sino debe abarcar el aspecto productivo, donde a través de diversas formas de organización, puedan crearse las bases para consolidar proyectos comunitarios donde se beneficien todos los integrantes de una comunidad y organización social.

En América Latina se han conformado diversas empresas con carácter social que han sido exitosas. Por ejemplo:

a) El caso de Villa El Salvador de Perú, donde más de 350 mil pobres construyeron un municipio entero, con base en su participación y autogestión, y obtuvieron avances notables en educación, salud y otros aspectos básicos; además de crear empresas comunitarias, entre las que destacan hospitales, farmacias, mercados, peluquerías, etcétera. La experiencia se hizo acreedora de algunas de las más importantes distinciones mundiales (Franco, 1994:421).

b) La pregunta de cómo abaratar el costo de los productos alimenticios para los sectores humildes de la población ha tenido una respuesta significativa en la ciudad de Barquisimeto en Venezuela. Iniciadas en 1983, las ferias de consumo familiar han logrado reducir en un 4 por ciento los precios de venta al público de productos verdes como frutas y hortalizas, y entre un 15 y 20 por ciento los precios de víveres. Ello beneficia semanalmente a 40 mil familias de esa ciudad de un millón de habitantes. Esas familias, integrantes principalmente de estratos bajos y medios y medios bajos, obtienen comprando en las ferias un ahorro anual que se estima en 10.5 millones de dólares.

Las ferias están integradas por un amplio número de organizaciones de la sociedad civil. Formalmente constituyen parte de la Central Cooperativa del Estado de Lara (COCOSELA), pero en su operación intervienen grupos de productores, asociaciones de consumidores y pequeñas empresas autogestionarias. Así, en las ferias participan 18 asociaciones de productores agrícolas que agrupan a cerca de 600 productores y 12 unidades de producción comunitaria. Esos pequeños y medianos agricultores y los productores de víveres colocan su producción a través de las ferias, éstas comprenden 50 puntos de ventas que operan los tres últimos días de la semana, y venden directamente a la población 300 toneladas semanales de producción hortofrutícola y víveres comunes para el consumo hogareño (Kliksberg, 1994:107-108).

c) La agricultura urbana en Bolivia y Argentina donde el Estado facilita tierras, herramientas y asistencia técnica, y la población contribuye con su trabajo y participa en la organización del proyecto.

d) Programa de cocinas comunitarias, las cuales se han implantado en países como Perú o Brasil.

En este modelo, los municipios locales proveen los alimentos, los materiales para la instalación de una cocina y, eventualmente, un comedor y recursos energéticos (gas, leña, kerosén); un organismo no gubernamental ayuda a los usuarios a organizarse, y éstos se turnan para hacer funcionar la cocina colectiva preparando comidas, lavando platos, buscando el comestible, etcétera. (Finguelecich, 1994:77).

e) En México, estas empresas tienen como base la participación del Estado y la sociedad; comienzan a tener un mayor auge durante la aplicación del Programa de Solidaridad (PRONASOL) –sexenio 1988-1994– con los siguientes subprogramas: Fondos de solidaridad para la producción, Mujeres en solidaridad, Fondos de empresas en solidaridad (apoyo financiero y técnico a empresas sociales constituidas por pequeños productores), Fomento a la producción y a la productividad, entre otros. Desde el sexenio 1994 y 2000 y el actual, el Estado da impulso a programas productivos a través del Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales (FONAES), dando apoyo para la constitución de empresas de participación social en los sectores agrícola, industrial, comercio y servicios.

Estos ejemplos nos dan una panorámica sobre la importancia que van teniendo las empresas sociales. Consideramos que el Estado, al tomar en consideración las potencialidades sociales, puede brindar el apoyo para la consolidación y desarrollo de éstas, con el objeto de mitigar el problema más apremiante que estamos padeciendo los latinoamericanos: la pobreza.

Conclusiones

El proceso de reestructuración económica que está operando a nivel mundial ha traído consigo una serie de desajustes económicos en nuestro subcontinente, que cada vez más se convierte en un factor de desequilibrio para las endeble democracias. La participación de la sociedad en los asuntos públicos es un requerimiento impostergable.

La importancia que tienen las empresas sociales en el actual contexto latinoamericano así lo constata. El Estado tiene ante sí una responsabilidad histórica al compenetrarse con las organizaciones sociales para el establecimiento de mecanismos que tiendan a fortalecer proyectos de carácter social cuyo objeto sea mitigar las consecuencias derivadas de los programas de ajuste económico. Las experiencias de Villa el Salvador en el Perú o las ferias de consumo en Venezuela son prueba de ello.

Bibliografía

- Ayala Espino, José Luis (1982), *Límites del mercado y límites del Estado*, México, Instituto Nacional de Administración Pública.
- Cabrero Mendoza, Enrique (1995), *Del administrador al gerente público*, México, Instituto Nacional de Administración Pública.
- CEPAL (2001), *Informe sobre perspectivas de América Latina en el nuevo contexto internacional*, México, CEPAL.
- Cordera, Rolando y Carlos Tello (1985), *México: La disputa por la Nación*, México, Siglo XXI.
- Franco, Carlos (1994), "La experiencia de Villa El Salvador: del arenal a los logros fundamentales a través de un modelo social de avanzada", en Bernardo Kliksberg (compilador), *Pobreza. Un tema impostergable. Nuevas respuestas a nivel mundial*, México, Fondo de Cultura Económica.
- Friedman, Milton y Rose Friedman (1980), *La libertad de elegir*, Barcelona, Grijalbo.
- Finquielecich, Suna (1994), "Estrategias de supervivencia en las ciudades latinoamericanas", en Bernardo Kliksberg (compilador), *Pobreza. Un tema impostergable. Nuevas respuestas a nivel mundial*, México, Fondo de Cultura Económica.
- Guerrero Orozco, Omar (1994), "De la administración pública a la gerencia social," en *Opciones de Reforma de la Seguridad Social*, México, CISS, Serie Estudios 13.
- Kliksberg, Bernardo (1989), *Gerencia pública en tiempos de incertidumbre*, México, Instituto Nacional de Administración Pública.
- (1992), *Rediseñando al Estado en América Latina*, Caracas, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo.
- (1994), *Pobreza, un tema impostergable. Nuevas respuestas a nivel mundial*, México, Fondo de Cultura Económica.
- (2001), *El nuevo debate sobre el desarrollo y el rol del Estado. Mitos y realidades en la América Latina de hoy*, México, Instituto Nacional de Administración Pública.
- Motta, Roberto Paulo (1990), *Innovación y democratización de la gestión pública*, México, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo.
- Ruiz Dueñas, J. (1988), *Empresa pública. Elementos para un examen comparado*, México, Fondo de Cultura Económica.
- Tomis, B. (1987), *Participación popular y desarrollo en la base*, Chile, Organización Internacional del Trabajo.
- Uvalle Berrones, Ricardo (1994), *Los nuevos derroteros de la vida estatal*, México, Instituto de Administración Pública del Estado de México.
- (1994), "La gerencia pública: una tecnología del buen gobierno", en *Estudios Políticos*, México, Coordinación de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, núm. 5.
- y Marcela Bravo Ahuja Ruiz (1999), *Visión multidimensional del servicio público profesionalizado*, México, UNAM/Plaza y Valdés.
- Villarreal, René (1984), *La contrarrevolución monetarista*, México, Océano.